

Informe sobre la libertad 2022:

Los sindicatos construyen la paz



EMPLEOS RESPETUOSOS CON EL CLIMA

SALARIOS

DERECHOS

PROTECCIÓN SOCIAL

IGUALDAD

INCLUSIÓN

Un Nuevo Contrato Social



ITUC CSI IGB

Índice

Introducción	3
Colombia: Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)	4
Chile: rumbo a una nueva constitución	6
Myanmar Confederation of Trade Unions, Myanmar (CTUM)	7
Recomendación 205: Empleo y Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia	9
Irlanda del Norte: Irish Congress of Trade Unions (ICTU)	10
Seguridad Común 2022: Por nuestro futuro compartido	12
Túnez: Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)	13
Encuesta Mundial de la CSI 2022	15
Conclusión	16

Introducción

La ilegal y abominable invasión de Ucrania por parte de Rusia ha centrado la atención del mundo en la brutalidad de los conflictos armados y sus consecuencias a escala mundial aun cuando guerras de larga duración como la de Tigray y Yemen siguen haciendo estragos con consecuencias devastadoras.

La solidaridad sindical humanitaria internacional, al igual que los grandes esfuerzos para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de Ucrania, Myanmar y otros lugares, forma parte de un marco más amplio del empeño sindical por construir y mantener la paz y evitar los conflictos, y asegurar la reconstrucción tras ellos.

Aproximadamente 2.000 millones de personas viven en países afectados por conflictos. Actualmente son 56 las contiendas a nivel de Estado que se libran en el mundo.

La **Encuesta Mundial de la CSI de 2022** demuestra que el 62% de la población en el mundo desea que su Gobierno haga más por trabajar con otros países para promover la paz, el empleo y los derechos humanos.

La mayoría de la población vuelve a estar preocupada por la amenaza de una guerra nuclear y la mitad de los habitantes del mundo confiaría más en su Gobierno si este se comprometiera a través de un tratado internacional a prohibir las armas nucleares y trabajara para encontrar soluciones comunes con otros Gobiernos.

La población mundial desea que se actúe en favor de la paz, lo cual requiere una nueva arquitectura global, basada en la realización del nuevo contrato social para todas las personas, con el fin de atajar las causas profundas de los conflictos armados y garantizar la sostenibilidad y la resiliencia.

Si el mundo puede reunirse para abordar las amenazas del cambio climático, también debería invertir en un diálogo a escala global para acordar medidas de prevención de los conflictos, pongan fin a los ya existentes y aborden una reconstrucción justa y sostenible tras la guerra.

La CSI, conjuntamente con la Oficina Internacional de la Paz y el Centro Olof Palme, presentó en abril de 2022 un informe con el título de, **Por nuestro futuro compartido**, en el que se formulan recomendaciones fundamentales a favor de la seguridad común.

Representa un poderoso llamamiento para renovar las medidas de seguridad común, incluyendo la eliminación de las armas nucleares, el desarme y la desmilitarización en general y, fundamentalmente, un contrato social fuerte.

El presente Informe sobre la Libertad y sus estudios de caso nos recuerdan el importante papel que desempeñan los sindicatos en la lucha contra el conflicto, el autoritarismo, la opresión y la exclusión:

- En **Colombia**, los sindicatos han estado a la cabeza de décadas de lucha por la paz y la justicia social.
- En **Irlanda del Norte**, el movimiento sindical ha sido siempre un motor de paz y de superación de la división y el sectarismo.
- En **Myanmar**, los sindicatos continúan su larga lucha por la paz y la democracia en circunstancias de lo más difíciles y peligrosas bajo el yugo de una despiadada dictadura militar.
- En **Túnez**, la UGTT y otras organizaciones fueron galardonadas con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para construir un país postdictadura con una nueva constitución. Un compromiso que se mantiene igualmente firme en la medida en que el país se enfrenta a nuevos retos.

Son muchos los ejemplos de acción sindical a favor de la paz, la justicia y la democracia, tanto hoy como a lo largo de la historia de las organizaciones sindicales. Nos enorgullecemos de estos logros, mismos que inspirarán a los sindicatos de todo el mundo para planificar y hacer campaña por las libertades fundamentales, la democracia y la paz.

Sharan Burrow
Secretaria General de la CSI



(Julian Barreto/AFP)



Colombia

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)

La guerra en Colombia es una disputa por la tierra, el poder, la representación y el cambio social. A principios del siglo XIX la clase trabajadora se movilizó contra las empresas transnacionales que explotaban los recursos naturales del país como el petróleo, el banano y el oro. Estas huelgas y protestas se saldaron con matanzas de trabajadores y trabajadoras que reclamaban sus derechos.

El asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 desató una violencia política sin precedentes.

De 1956 a 1974, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron un acuerdo que establecía un sistema de alternancia política entre ambas fuerzas que tuvo que hacer frente a la oposición al excluir a otros partidos.

La mayoría de las guerrillas que surgieron en este periodo conjugaron la lucha política con la armada, y se encontraron con la represión oficial alineada con Estados Unidos.

Entre las guerrillas más conocidas de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las FARC-EP, el ELN, el EPL y el M-19. Estos grupos armados han justificado el uso de la violencia como único método para transformar la sociedad. La dinámica social y política de Colombia ha estado marcada por la exclusión socioeconómica, la falta de espacios de participación política, la acumulación de tierras por parte de unas pocas familias, el narcotráfico como combustible para alimentar la guerra y el uso de la violencia.

Según datos del Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), se estima que se han perpetrado 15.481 violaciones de los derechos humanos de sindicalistas, en particular 3.295 asesinatos.

La mayoría de las víctimas se dedicaban, movidas por sus ideales, a defender los derechos humanos y laborales como trabajadores y ciudadanos. Pero esta dedicación incomodaba a algunas personas que veían amenazados sus intereses y beneficios.

Esta violencia ha afectado profundamente el desarrollo de las organizaciones sindicales. La actividad sindical en Colombia ha sido estigmatizada y víctima de violencia. La CTC, como la central sindical más antigua de Colombia, ha sufrido esta situación en los diferentes periodos de violencia que ha vivido el país.

Desde el 7 de agosto de 2022 tenemos un Gobierno progresista y democrático que intenta resolver la grave situación económica, política y social. Sin embargo, nos preocupa el retorno de la violencia en las zonas rurales y urbanas, la exclusión, el creciente fenómeno de la migración y la violación de los derechos laborales. Además, la derecha sigue promoviendo un modelo económico que claramente ha fracasado llevando la vida humana al borde de la extinción.

A lo largo de su historia, la CTC ha contribuido a la construcción de la paz como derecho humano fundamental. Hemos alzado nuestra voz contra la corrupción y en defensa de la equidad y la justicia social a través del trabajo decente, la defensa de los recursos naturales, la soberanía nacional y la oposición a la pobreza y la exclusión social.

Un objetivo central de la CTC ha sido apoyar todos los procesos de paz. En el caso concreto del acuerdo con las FARC, la CTC apoyó la iniciativa del expresidente Juan Manuel Santos de iniciar un diálogo, respaldó el proceso de La Habana y estuvo presente en la firma del acuerdo.

Conjuntamente con la CUT y la CGT, lanzamos una enérgica campaña de sensibilización sobre la importancia de la firma del acuerdo, con actos en diferentes ciudades.



(Sebastián Barros/Nur Photo/AFP)

Una vez vigente el acuerdo, la CTC lo ha defendido con firmeza y ha denunciado el incumplimiento del pacto por parte del Gobierno del expresidente Duque a través de eventos como “La paz de Colombia en riesgo”, realizado a la par de la CUT en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en junio de 2019, con el apoyo de la CSI.

La CTC está firmemente convencida de que el diálogo social y el trabajo decente son la vía para salir de la pobreza hacia una paz estable y duradera. Hemos apoyado y promovido espacios de diálogo social en todo el país con el objetivo de defender el trabajo decente, la equidad, la justicia social, la seguridad social y el servicio de salud.

La CTC ha participado activamente en la reconstrucción de la verdad de lo ocurrido al movimiento sindical durante el conflicto, a través de presentaciones a las comisiones que investigan los hechos. A través del CONARE (Comité de Impulso del Proceso de Reparación Colectiva del Sindicalismo), buscamos la reparación integral para el movimiento sindical.

Un nuevo contrato social es la única manera de lograr una paz total con justicia social y de reforzar el diálogo social.

Chile: rumbo a una nueva constitución

En 2019, un levantamiento popular masivo encabezado por los sindicatos y los movimientos sociales doblegó al Gobierno y allanó el camino para un proceso de redacción de una nueva constitución.

Aun cuando la transición a la democracia en el país tuvo lugar en 1990, las reglas establecidas por el largo tiempo dictador militar Augusto Pinochet seguían vigentes.

Las políticas de Pinochet estaban muy influenciadas por los desacreditados “Chicago Boys”, quienes predicaron la privatización de servicios vitales como la sanidad, la educación, las pensiones e incluso el agua.

Sin embargo, los sucesivos intentos de reescribir la Constitución de Pinochet habían fracasado hasta que el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a aceptar que se votara por el establecimiento de una convención constitucional.

Finalmente, en 2021 se eligió una Asamblea Constituyente con igual proporción de mujeres y hombres y con escaños reservados para los pueblos indígenas.

Después de casi un año, la Asamblea presentó un proyecto que reconocía los derechos de los pueblos originarios, añadía protecciones medioambientales, incrementaba la paridad de género y garantizaba los derechos a la educación pública, las pensiones y la atención sanitaria.

Además, el proyecto reconocía “el derecho a un trabajo decente como el derecho a unas condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el pleno respeto de los derechos fundamentales”.

Este resultado fue fruto de la intensa participación de la CUT Chile, que puso en marcha una amplia consulta entre trabajadores y expertos en derecho laboral, en particular el antiguo director general de la OIT Juan Somavía, para elaborar una enmienda sindical que superó los 15.000 apoyos ciudadanos que requería para ser discutida en el seno de la Convención Constitucional.

Para decepción de muchos, el proyecto de Constitución fue rechazado en referéndum en septiembre de 2022, principalmente debido a las tácticas de alarmismo de los medios de comunicación de derechas y al uso generalizado de noticias falsas a través de las redes sociales.

Sin embargo, los sindicatos y los movimientos sociales no se desanimaron y se comprometieron a seguir luchando hasta dejar completamente enterrada la última herencia del régimen de Pinochet.



(Myat Thu Kyaw/NurPhoto/AFP)



Myanmar

Confederation of Trade Unions, Myanmar (CTUM)

En Myanmar hemos pasado de un régimen militar a la democracia y viceversa. No hemos tenido muchas opciones porque los militares deciden qué tipo de país desean.

El conflicto gira principalmente en torno a la igualdad con las diferentes nacionalidades étnicas que conforman Birmania y entre ellas. Estas comunidades siempre tuvieron su propia cultura y territorio, hasta que fueron obligadas a someterse a la administración india del Imperio Británico. En 1948 Birmania obtuvo su independencia y se desató el caos. Desde 1962 los militares se han aprovechado de la situación y han dado un golpe tras otro, gobernando por medio de la fuerza bruta.

El resultado es una sociedad en la que existe poca confianza y mucha corrupción. La economía se basa

en el amiguismo favorecido por enormes contratos de infraestructuras militares gestionados por corporaciones dirigidas por militares. El sistema educativo se basa en la coacción y el soborno y en la doctrina de que los militares son superiores en todo sentido.

Los sindicatos se convirtieron en una unidad organizada en la lucha popular de 1988, ya que participamos en manifestaciones, marchas y huelgas. Perdimos esta lucha en las ciudades, pero nos reagrupamos en las zonas controladas por las distintas etnias. En 1992, fundamos la federación de sindicatos de Birmania, Federation of Trade Unions Burma (FTUB) y empezamos a establecer contactos internacionales con la UITA, la CSI y muchas otras organizaciones mundiales.

Es entonces cuando pudimos utilizar el mecanismo de quejas de la OIT para ejercer presión sobre el régimen militar. Nuestros compañeros sindicalistas internacionales nos orientaron en este proceso y sabemos que, diga lo que diga, al régimen le preocupa la OIT. Nuestra experiencia es que las decisiones y resoluciones de la OIT ejercen un impacto y dan resultados.

Para llevar los casos ante la OIT, nuestros miembros empezaron a trabajar con las comunidades étnicas y documentaron el trabajo forzoso del régimen militar. Como el Grupo de los Trabajadores de la OIT presentaba estas pruebas una y otra vez, los militares se vieron obligados a responder y dijeron que existían violaciones pero que podían solucionarse. Acabaron por cambiar de táctica y detuvieron a muchos de nuestros miembros en Birmania y Tailandia.

Cuando la FTUB se estructuró más, enviamos activistas al programa de liderazgo juvenil de la CSI-Asia y el Pacífico. Dos de las compañeras de este primer grupo siguen en la CTUM dirigiendo sus propios sectores.



Ahora estamos viviendo una revolución de nuevo, pero ya habíamos empezado a construir una cultura democrática a través de los principios del nuevo contrato social. Con nuestras nacionalidades multiétnicas, la cuestión de la inclusión era fundamental.

Al principio, nuestro representante en el foro tripartito nacional para revisar la ley de seguridad social se topó con la incredulidad y la resistencia. Pero al final del proceso, los participantes comprendieron que son los trabajadores los que mantienen el sistema en funcionamiento, son los expertos y tienen algo importante que aportar a las negociaciones.

También funcionó en sentido inverso. A través de estos foros, los miembros del sindicato conocieron a médicos y académicos y se dieron cuenta de que también estaban luchando contra los mismos retos, como la privatización y el trabajo precario. Se fue creando un sentimiento de solidaridad entre los trabajadores al darse cuenta de que tenían más en común de lo que pensaban.

Un nuevo y sólido contrato social es la clave para mantener a las personas en el trabajo y mantener la paz.

Ahora mismo nuestro país vive bajo una dictadura que quiere convertirse en un Estado vasallo de Rusia para sobrevivir. Sin embargo, desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, hemos conseguido mucho a nivel interno e internacional. En Myanmar, se ha asesinado a personas y se han quemado poblaciones enteras, pero grandes zonas del país siguen bajo control local. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el representante permanente habla en nombre del Gobierno de Unidad Nacional y no de la junta militar.

En el futuro nos preocupa no tener suficientes sindicalistas experimentados. Nuestra experiencia reciente ha demostrado que, aun bajo un partido político democrático, hay que luchar por los derechos laborales palmo a palmo.

Cuando vuelva la democracia, tendremos una mayor disposición a presionar por los intereses de los trabajadores. En el pasado, éramos demasiado pacientes y esperábamos que el partido político actuara.

Los sindicatos están en una posición única, ya que no tienen un programa oculto y poseen la capacidad de lograr un cambio real para los trabajadores y las trabajadoras.

Recomendación 205: Empleo y Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia

La OIT se creó tras la Primera Guerra Mundial sobre un principio fundamental: “La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Tiene más de 100 años de experiencia en ayudar a las sociedades a hacer la transición del conflicto a la paz mediante el trabajo decente y la participación de los interlocutores sociales.

Este papel en la promoción de la paz fue reafirmado en 2017 por la **Recomendación núm. 205**, que proporciona orientación para la construcción de la paz y la resiliencia a través del empleo y el trabajo decente. Se centra en la reconstrucción y la recuperación, pero también en la prevención y la preparación para mitigar el impacto de las crisis a través de una serie de temas relativos al trabajo decente:

- Seguridad y salud en el trabajo
- Protección social
- Condiciones de trabajo decentes
- La transición de la economía informal a la formal
- Formación profesional, desarrollo de competencias y aprendizaje permanente
- Atención especial a las personas migrantes, refugiadas y repatriadas afectadas por situaciones de crisis
- Una transición justa hacia una economía ambientalmente sostenible.

Confiere a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras voz y herramientas para incidir en el contexto de los conflictos y las catástrofes, ya que se apoya en un intenso diálogo social encaminado al diseño y la aplicación de las estrategias de recuperación.



(Kevin Cooper-Photoline)



Irlanda del Norte

Irish Congress of Trade Unions (ICTU)

El conflicto civil de Irlanda del Norte surgió a raíz de las convulsiones mundiales de 1968 y tardó 30 años en resolverse en su mayor parte. Fue un conflicto en el que se mezclaron la nacionalidad, la identidad nacional, el sectarismo religioso, el traslado de población, la violencia estatal, la legislación represiva, los asesinatos aleatorios, las extorsiones para obtener “protección”, los robos a mano armada, el control coercitivo de los paramilitares y la reordenación de una economía en torno a la seguridad.

Fueron asesinadas más de 3.600 personas y miles resultaron heridas física o psicológicamente. La mayoría de ellas estaban trabajando, o iban de camino al trabajo, cuando fueron atacadas. Entre ellas había soldados, policías y funcionarios de prisiones, funcionarios públicos, contratistas privados identificados como “colaboradores”, porteros de tiendas y bares, dependientes, bomberos,

taxistas, una mujer que recogía formularios del censo, personas que trabajaban junto a gente del “otro bando”, trabajadores de correos y repartidores de leche que hacían unas horas a la semana como reserva a tiempo parcial en el ejército o la policía.

Miles de personas se vieron obligadas a abandonar lugares de trabajo que habían sido aceptables durante un tiempo, y que luego se volvieron gradualmente inseguros.

La economía estaba arruinada. Los inversores extranjeros huyeron, especialmente después de que algunos dirigentes empresariales expatriados fueran secuestrados y asesinados. El Estado colmó algunas lagunas con trabajos de reconstrucción y seguridad, pero el desempleo era alto y persistente, especialmente para la comunidad católica.

Bajo el liderazgo del ICTU, los sindicatos se mantuvieron unidos en una única confederación, a pesar de los esfuerzos por dividir el movimiento en líneas sectarias. Esta unidad se logró gracias a que la clase trabajadora vislumbró un panorama más amplio que el ofrecido por la clase política local, o sus agentes paramilitares.

Surgieron una serie de campañas sindicales a favor de puestos de trabajo seguros y lugares de trabajo seguros, con calles seguras en el exterior. Se acordó una “Declaración Conjunta de Protección” con los empresarios para poner en cuestión y abordar el sectarismo en el lugar de trabajo. Veinte años después, se negoció una iniciativa similar enfocada al racismo.

Los sindicatos organizaron grandes manifestaciones públicas tras los asesinatos sectarios, lo que permitió a los ciudadanos expresar el horror que compartían ante tal atrocidad.

Muchas campañas sindicales a favor de una inversión en la paz y en la economía se pusieron en pie con grupos de empresarios e incluso con ministros gubernamentales. Los dirigentes sindicales fueron aclamados como pacificadores incluso por los políticos del Gobierno del Partido Conservador británico de Margaret Thatcher. Sin embargo, muchas de las tácticas desarrolladas para reprimir la desobediencia civil en Irlanda del Norte se utilizaron posteriormente para reprimir las huelgas de los mineros y de los trabajadores de la prensa inglesa y galesa.

Los sindicalistas de las décadas de los años 1970 y 1980 fueron valientes y esforzados. Se enfrentaron a los matones sectarios en los centros de trabajo, lideraron los esfuerzos para “apoyar a mi compañero” (el nombre de una campaña del ICTU contra la intimidación), retiraron los símbolos sectarios de los centros de trabajo, y algunos fueron fusilados por ello. Sin embargo, los sindicatos siguieron adelante. Un delegado sindical británico/protestante persuadiendo a su correligionario de que retire sus símbolos de identidad en el lugar de trabajo tuvo un legado duradero que ninguna ley u organismo estatal puede igualar.

Estos ejemplos de valores sindicales, reconocibles en cualquier tipo de sociedad, siguen siendo necesarios hoy en día. La peor violencia se ha disipado desde el acuerdo de paz de 1998, pero la sociedad sigue siendo disfuncional, con una cultura política dominada por dos bloques contrapuestos de agravios. El Gobierno descentralizado

fue diseñado para ser compartido por los responsables políticos de ambas partes, pero ha permanecido suspendido durante casi la mitad de sus 24 años de precaria existencia.

La línea constante que durante 50 años ha guiado a los sindicatos es que la injusticia económica alimenta los resentimientos que llevan a competir por los recursos, lo que luego los cínicos empresarios políticos han enfocado fácilmente en el sectarismo para favorecer sus propios fines.

Cuando los sindicatos hicieron campaña a favor del acuerdo de paz de 1998, pidieron una legislación integral sobre la igualdad y su aplicación, para que las mujeres y los grupos minoritarios pudieran contribuir cabalmente a la sociedad. Trabajaron a favor de una Carta de Derechos inclusiva que protegiera los derechos sociales y económicos y reconociera la identidad de cada persona.

Han hecho campaña a favor de unos servicios públicos universales financiados mediante una fiscalidad progresiva y una negociación colectiva que beneficiara a todos los trabajadores y trabajadoras. Han defendido una colaboración significativa entre las comunidades “tradicionales”, así como entre el capital, el trabajo y la sociedad civil.

Sin embargo, este acuerdo ha sido aplicado solo parcialmente por los partidos políticos que se oponen a sus posibilidades progresistas y transformadoras, y se ha visto socavado por el Brexit y un Gobierno del Partido Conservador en Gran Bretaña centrado en su base nacionalista inglesa.

Queda mucho por hacer, y los sindicatos que se mantengan fieles a los principios de las últimas décadas continuarán este empeño.



Seguridad Común 2022: Por nuestro futuro compartido

Este año, un grupo de influyentes líderes de la sociedad civil lanzaron un llamamiento a la acción para encaminar al mundo por la senda de la paz sentando las bases del concepto de seguridad común.

En 1982, la Comisión Palme había desarrollado el concepto en su innovador informe, Seguridad Común: Un programa de desarme, que contribuyó en gran medida a aliviar las tensiones en plena Guerra Fría.

Seguridad Común 2022: por nuestro futuro compartido insta a los líderes mundiales a volver a la senda del desarme y el progreso pacífico y a cooperar para superar los riesgos contemporáneos que amenazan la seguridad y superar las causas de los conflictos, especialmente el cambio climático y el calentamiento global, la desigualdad, las pandemias actuales y futuras y los regímenes autoritarios que reducen el espacio democrático.

Las recomendaciones están enfocadas a cuatro áreas principales:

1. Fortalecer la arquitectura global para la paz.
2. Un nuevo dividendo de paz: Desarme y desarrollo.
3. Revitalizar el control y desarme de las armas nucleares.
4. Nueva tecnología militar y armas en el espacio exterior.

“ Un mundo en peligro nos exige reimaginar la paz. La Seguridad Común, aquella en donde la seguridad no se construye a expensas de los demás, contribuyó a poner fin a la Guerra Fría y al desarme convencional y nuclear. Hoy día, la Seguridad Común requiere una cooperación mundial para construir una arquitectura de paz que incluya un contrato social para nuestra seguridad humana, así como vías para desescalar una peligrosa carrera armamentística.

Philip Jennings
Copresidente de la Oficina Internacional de la Paz



Túnez

Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)

La revolución de enero de 2011 fue un momento histórico que marcó el inicio del proceso de construcción democrática en Túnez tras décadas de dictadura política.

El avance hacia la gobernanza democrática se tradujo en elecciones transparentes en octubre de 2011 y en una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución.

Sin embargo, desde mediados de 2013 el país está sumido en una crisis política alimentada por el auge sin precedentes del radicalismo religioso y los actos de terrorismo, la violencia y los asesinatos políticos recurrentes. La crisis alcanzó su punto álgido en julio de 2013 con el asesinato de los activistas Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, lo que provocó un bloqueo

institucional y manifestaciones violentas que amenazaron con una guerra civil.

En este contexto, la UGTT lanzó en 2013 su iniciativa de Diálogo Nacional en colaboración con la UTICA, la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados. Tras unas largas negociaciones, logró unir a todas las fuerzas políticas y civiles del país en torno a una hoja de ruta política.

De este modo, se conseguirá una nueva constitución progresista y democrática que reconozca plenamente los derechos y libertades individuales, la igualdad de género y los derechos económicos y sociales, en particular el derecho a organizarse y el derecho de huelga.

El Diálogo Nacional ha establecido los pilares de un mecanismo innovador para resolver conflictos entre entidades políticas completamente opuestas. En reconocimiento a esta labor, la UGTT y sus socios fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2015.

A pesar de todos los avances realizados hacia una democracia duradera e inclusiva, el proceso de transición se ve amenazado. Se ha producido una desconexión entre las instituciones políticas y las expectativas populares debido a la persistente crisis económica y social y a la incapacidad de los partidos políticos para aplicar programas y estrategias pertinentes.

Este contexto ha provocado movimientos de protesta y un rechazo total a los partidos políticos por parte de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.

Un discurso populista y una mentalidad de exclusión han sustituido al diálogo inclusivo sobre soluciones consensuadas y prácticas a los asfixiantes problemas políticos, económicos y sociales de Túnez.

El ambiente de rechazo se intensificó con la crisis sanitaria del COVID-19, que tuvo repercusiones desastrosas en las condiciones de vida de los tunecinos.

En julio de 2021, el Presidente de la República anunció una serie de medidas excepcionales, como la suspensión del Parlamento y la monopolización de todos los poderes ejecutivo y legislativo.

Aunque entendemos que esta medida se aplicó en respuesta a una crisis sin precedentes, consideramos que la concentración de todo el poder en manos de una sola persona amenaza los logros democráticos y los avances realizados en la gobernanza política desde la revolución. Nuestra preocupación aumentó en julio de 2022, cuando el presidente adoptó unilateralmente una nueva constitución sin consultar a los partidos políticos ni a los interlocutores sociales.

El consenso nacional ha sido siempre uno de los pilares de la cohesión social en Túnez y un elemento básico de su gobernanza política durante décadas. Túnez se encuentra en una encrucijada y no puede excluirse el riesgo de que vuelva a estallar el conflicto.

Superar esta situación exigirá un diálogo nacional inclusivo que aborde las cuestiones políticas, económicas y sociales. En nuestra opinión, un programa de rescate nacional consensuado es la única manera de lograr las reformas institucionales necesarias para devolver al país a la senda de la democracia, la paz y la justicia social que garantice el pleno respeto de las libertades individuales y colectivas.



Encuesta Mundial de la CSI 2022

La población mundial afirma querer que los Gobiernos den prioridad a la construcción de la paz sobre el militarismo. En la **Encuesta Mundial de la CSI 2022:**

- El 62% de las personas desea que su Gobierno haga mayores esfuerzos por trabajar con otros países para promover la paz, el empleo y los derechos humanos.
- El 50% confiaría más en su Gobierno si este trabajara para encontrar soluciones comunes con otros Gobiernos.
- El 51% está preocupado por la amenaza de una guerra nuclear (un aumento desde el 42% en 2020).
- El 50% confiaría más en su Gobierno si se comprometiera mediante un tratado internacional a prohibir las armas nucleares.

Las personas se dan cuenta de que no se trata solamente de una cuestión de paz, sino también de justicia social basada en un nuevo contrato social:

- Empleo: el 58% de la población desea que su Gobierno haga más para promover una transición justa hacia un futuro sin emisiones de carbono.
- Derechos: el 62% quiere que su Gobierno trabaje más con otros países para promover la paz, el empleo y los derechos humanos.
- Salarios: el 68% quiere que su Gobierno trabaje para conseguir una subida salarial para los trabajadores y trabajadoras.
- Protección social: el 87% apoya el acceso asequible a la sanidad.
- Igualdad: el 66% está preocupada por la desigualdad de ingresos y oportunidades entre hombres y mujeres.
- Inclusión: el 81% quiere leyes internacionales que obliguen a las empresas a rendir cuentas por las violaciones de los derechos medioambientales y laborales en su cadena de suministro.

Conclusión

El presente informe es un reconocimiento a las décadas de acción por la paz y la democracia de las organizaciones sindicales de todo el mundo. Nos recuerda que, sin paz, los derechos y las libertades democráticas, el trabajo decente y la protección social siguen siendo inalcanzables.

Los sindicatos que se encuentran en primera línea del frente de la lucha por la paz participan en el vasto campo de la resistencia.

Saludamos su valentía y su activismo colectivo para hacer el mundo más seguro para todos nosotros, y nos comprometemos a apoyar, a través de la acción humanitaria, política y organizativa, a los sindicatos que trabajan por la paz y la democracia, dondequiera que se encuentren. El apoyo a la reconstrucción y la solidaridad global del resto de nuestra familia sindical es de vital importancia.

CSI
Confederación Sindical Internacional

info@ituc-csi.org

www.ituc-csi.org

Teléfono: +32 (0)2 224 0211

Fax: +32 (0)2 201 5815

Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1
1210 Bruselas - Bélgica

Editora responsable legal:
Sharan Burrow, secretaria general

